

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, tres (03) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio No. 326

MAGISTRADO PONENTE: VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ

| | |
|-------------------|--|
| MEDIO DE CONTROL: | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO |
| EXPEDIENTE: | 76147-33-33-002-2016-00132-01 |
| DEMANDANTE: | ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ Ballemar80@hotmail.com |
| DEMANDADO: | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO - EMCARTAGO ESP juridica@emcartago.com |
| ASUNTO | RECHAZA RECURSO DE APELACIÓN |

I. OBJETO DE LA DECISION

Sería del caso entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la entidad demandada, Empresas Municipales de Cartago – EMCARTAGO E.S.P., en contra del Auto No. 1715 del 23 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, en desarrollo de la audiencia inicial, por medio del cual declaró no probada la excepción denominada falta de jurisdicción y competencia, no obstante, se advierte que dicho recurso resulta ser improcedente, tal como se expone a continuación.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del CPACA, el señor Enrique Gómez González actuando a través de apoderado judicial, presentó demanda contra las Empresas Municipales de Cartago – EMCARTAGO ESP, con el propósito de que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 1287/2002 del 27 de agosto de 2002, mediante la cual se reconoció la pensión de jubilación del actor sin incluir la totalidad de los factores salariales y del Oficio TRD No. 410.001638 del 09 de marzo de 2015, que le negó la reliquidación de la pensión.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA

Se trata del Auto Interlocutorio No. 1715 del 23 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, por medio del cual declaró no probada la excepción denominada falta de jurisdicción y competencia, con fundamento en las siguientes razones:

*“Se observa que en el presente proceso la parte demandada **EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO – EMCARTAGO E.S.P.** en el escrito de contestación a la demanda, propuso la excepción previa de Falta de Competencia.*

De manera sucinta manifiesta que desconoce la providencia del 26 de julio de 2017, por la cual el Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto de competencias entre el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cartago y el

Juzgado Laboral del Circuito de Cartago, asignándole a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de este proceso. Aunado a lo anterior, manifiesta que el demandante al ser trabajador oficial y al tratarse un conflicto de carácter laboral, la jurisdicción competente es la ordinaria.

Para resolver la excepción previa de Falta de Competencia propuesta por la entidad demandada, el despacho manifiesta que mediante el auto interlocutorio No. 141 del 02 de junio de 2016, se declaró la falta de jurisdicción y competencia y se ordenó remitir el expediente al Juzgado Laboral del Circuito de Cartago Valle, este último despacho propuso el conflicto negativo de competencia y lo remitió a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; en providencia del día 26 de julio de 2017, la Sala Jurisdiccional dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones, asignándole el conocimiento del presente asunto a este despacho; por lo cual no puede esta célula judicial y mucho menos las partes desconocer el carácter vinculante de la decisión de Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.”

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La apoderada judicial de EMCARTAGO ESP expuso en síntesis, que si bien, no se discute la calidad del demandante, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desconociendo el factor funcional, se pronunció de manera subjetiva asignándole el conocimiento del presente asunto al Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, quien declara como probada la falta de jurisdicción.

Sostiene que, conforme el numeral 4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, de lo relativo a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos cuando dicho régimen este administrado por una persona de derecho público, también lo es que esta disposición hace referencia a quienes ostentan la calidad de empleados públicos, situación que no es la de la demandante, toda vez que ostenta la calidad de trabajador oficial y en razón a la naturaleza, cien por ciento pública de las Empresas Municipales de Cartago, que se rige por las normas de las empresas industriales y comerciales del Estado, las personas que presan sus servicios son trabajadores oficiales.

Señala que, conforme a la historia laboral del demandante, las funciones que desempeñaba era la de obrero y posteriormente la de operario, y nunca desempeñó funciones de dirección y confianza.

Finalmente precisó, que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para dirimir el conflicto negativo de competencia, solo se limitó al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, omitiendo estudiar el numeral 4 del artículo 105 ibídem.

V. CONSIDERACIONES

Sería del caso entrar a resolver de fondo el recurso de apelación propuesto por la apoderada judicial de Emcartago ESP, no obstante, como quiera que la decisión objeto del recurso tiene que ver con la decisión adoptada por el *a quo*, que declaró no probada la excepción de *falta de jurisdicción y competencia*, tal asunto no es susceptible del recurso de apelación, por las razones que a continuación se exponen:



Radicación : 76147-33-33-002-2016-00132-01
Medio de control : NULIDAD Y REST. DEL DERECHO
Demandante : ENRIQUE GOMEZ GONZALEZ
Demandado : EMCARTAGO ESP

3

En primer lugar, ha de destacarse que la excepción propuesta por la apoderada judicial de Emcartago ESP, en la contestación de la demanda, denominada falta de jurisdicción y competencia y que es objeto del presente recurso, se encontraba orientada a señalar que la presente demanda es de competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, por cuanto se está ante un asunto derivado de una relación laboral y el demandante ostenta la calidad de trabajador oficial.

En segundo lugar, es importante resaltar que el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, según Acta nro. 060 de 26 de julio de 2016¹, al dirimir el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago y el Juzgado Laboral del Circuito de la misma municipalidad, resolvió asignar el conocimiento del presente asunto a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Por mandato del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, la competencia para dirimir los conflictos negativos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, le corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dada la posibilidad de que entre quienes ejercen la función de administrar justicia, puedan presentarse diferencias respecto de a quien el legislador le asignó el conocimiento de determinados asuntos.

“ARTICULO 112. FUNCIONES DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:

(...)

2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional.”

En efecto, es claro que por expresa disposición del artículo 256, numeral 6° de la Constitución, en concordancia con el artículo 112, numeral 2° de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, es el órgano a quien se ha encomendado la función de dirimir los conflictos que se susciten entre las diversas jurisdicciones.

También resulta pertinente precisar, que una vez resuelto el conflicto y discernido la competencia en una jurisdicción determinada, por quien constitucional y legalmente está facultado para ello, no puede presentarse en otras instancias del mismo proceso una nueva discusión sobre ese presupuesto procesal, como quiera que ya ha sido objeto de examen y decisión y, en consecuencia, se convierte en ley del proceso de obligatorio cumplimiento y, por lo tanto, no puede ser discutido ni desconocido por las partes ni por funcionario judicial alguno².

Lo anterior, por cuanto la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria que ponga fin a una colisión de competencias entre dos funcionarios judiciales, tiene el carácter de vinculante y definitiva, y le proporciona al proceso el principio de seguridad jurídica, en el sentido de que el mismo punto no será debatido en ninguna instancia judicial posterior.

¹ Folio 6 del cuaderno nro. 3

² Así lo estableció la Corte Constitucional en sentencia. T-806/00. M.P. Alfredo Beltrán Sierra

De otro lado, encuentra el Despacho que el artículo 243 del CPACA, enlista las decisiones que son pasibles del recurso de apelación dentro del proceso ordinario contencioso administrativo, a saber:

"Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos

- 1. El que rechace la demanda.*
- 2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.*
- 3. El que ponga fin al proceso.*
- 4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.*
- 5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.*
- 6. El que decreta las nulidades procesales.*
- 7. El que niega la intervención de terceros.*
- 8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.*
- 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente (...).".*

A su turno el artículo 180 numeral sexto ibídem, señala que el *"auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso"*.

Resulta claro que, en principio, respecto a la providencia que resuelve las excepciones previas en desarrollo de la audiencia inicial, es pasible del recurso de apelación, no obstante, el artículo 168 de la Ley 1437 de 2011, regula de manera expresa la figura de la falta de jurisdicción o de competencia, estableciendo que, en caso de su configuración, mediante decisión motivada, el juez ordenará remitir el expediente al que considere competente.

De manera que, contra la decisión que resuelva la falta de jurisdicción o de competencia no es susceptible el recurso de apelación, ello por cuanto si bien, en principio la providencia que resuelve las excepciones previas es pasible del recurso de apelación, tal como lo indica el inciso final numeral sexto de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que, cuando ésta última decisión esté referida de manera particular a resolver sobre la falta de jurisdicción y competencia no es procedente el recurso de apelación, por cuanto, quien tiene la competencia para resolver cualquier controversia, es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Ésta posición ha sido adoptada en diferentes providencias por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá³, así en providencia de 07 de abril de 2017, con ponencia del magistrado Fabio Iván Afanador García, radicado: 2013-00356, rechazó por improcedente el recurso de apelación formulado en contra de la decisión que decidió la excepción de falta de jurisdicción y competencia, señaló lo siguiente:

³ Al respecto ver: Tribunal Administrativo de Boyacá. MP. Félix Alberto Rodríguez Riveros. Providencia de 08 de julio de 2016, rad: 2014-0017301. Tribunal Administrativo de Boyacá. MP. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Providencia de 31 de mayo de 2017. Rad: 2016-00116-01.

"(...) Es dable determinar entonces, que así como la decisión sobre la falta de jurisdicción declarada en principio por el juez no es un auto susceptible de apelación, tampoco lo será la que, al resolver una excepción, determine la falta de jurisdicción.

Esta interpretación resulta razonable, ya que, en el evento en que se decida negar esta excepción, y el juez afirme su jurisdicción sin posibilidad de impugnar ante el superior, se garantiza la efectividad del derecho de acceso a la justicia, y en el caso en que se declare la prosperidad de la excepción, resulta lógico que se impida el mecanismo de la impugnación a través del recurso de apelación, pues lo propio es que por razones de celeridad se debe enviar el expediente a la jurisdicción competente. Y en caso de controversia, será la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con autoridad de cosa juzgada, quien decida en últimas cuál es la jurisdicción competente (...)"

Así las cosas, como quiera que en el presente caso el *a quo* declaró no probada la excepción de falta de *jurisdicción y competencia* propuesta por la apoderada judicial de Emcartago E.S.P., tal decisión no es pasible del recurso de apelación por las razones expuestas, por la cual el recurso incoado en contra de tal decisión será declarado improcedente.

En consecuencia,

R E S U E L V E:

PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de las Empresas Municipales de Cartago – EMCARTAGO ESP, en contra del auto No. 1715 del 23 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, en desarrollo de la audiencia inicial, por medio del cual declaró no probada la excepción denominada falta de jurisdicción y competencia, conforme a las razones expuestas en ésta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,



VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado